



OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Oficina Regional para América Latina y el Caribe



INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
Regional Office for Latin America and the Caribbean

ESTRATEGIA PARA PROMOVER LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO DE LA OIT

STRATEGY TO PROMOTE THE ILO DECLARATION ON FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND RIGHTS AT WORK

Proyecto Principios y Derechos en el Trabajo en el contexto
de la XIII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de la OEA

Project Principles and Rights at Work in the context
of the XIII Inter-American Conference of Ministers of Labour of the OAS

Las publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo gozan de la protección de los derechos de propiedad intelectual en virtud del protocolo 2 anexo a la Convención Universal sobre Derecho de Autor. No obstante, ciertos extractos breves de estas publicaciones pueden reproducirse sin autorización, con la condición de que se mencione la fuente. Para obtener los derechos de reproducción o de traducción deben formularse las correspondientes solicitudes a la Oficina de Publicaciones (Derechos de autor y licencias). Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211, Ginebra 22, Suiza, solicitudes que serán bien acogidas.

Publications of the International Labour Office enjoy copyright under protocol 2 of the Universal Copyright Convention. Nevertheless, short excerpts from them may be reproduced without authorization, on condition that the source is indicated. For rights of reproduction or translation, application should be made to the Publications Bureau (Rights and Permissions). International Labour Office, CH-1211, Geneva 22, Switzerland. The ILO welcomes such applications.

ISBN: 92-2-017225-9 (Versión Impresa)

ISBN: 92-2-017226-7 (Versión PDF)

ISBN: 92-2-017227-5 (Versión HTML)

Las denominaciones empleadas, en concordancia con la práctica seguida en las Naciones Unidas, y la forma en que aparecen presentados los datos en las publicaciones de la OIT no implican juicio alguno por parte de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras. La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones firmados incumbe exclusivamente a sus autores, y su publicación no significa que la OIT las sancione.

Las referencias a firmas o a procesos o productos comerciales no implica aprobación alguna por la Oficina Internacional del Trabajo, y el hecho de que no se mencionen firmas o procesos, o productos comerciales no implica desaprobación alguna.

Las publicaciones de la OIT pueden obtenerse en Las Flores 275, San Isidro, Lima 27-Perú, o pidiéndolas al Apartado Postal 14-124, Lima, Perú.

Vea nuestro sitio en la red: www.oit.org.pe

The designations employed, which are in conformity with United Nations practice, and the presentation of material therein do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the International Labour Office concerning the legal status of any country, area or territory or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers. The responsibility for opinions expressed in signed articles, studies and other contributions rests solely with their authors, and publication does not constitute an endorsement by the ILO of the opinions expressed in them.

Reference to names of firms and commercial products and processes does not imply their endorsement by the International Labour Office, and any failure to mention a particular firm, commercial product or process is not a sign of disapproval.

ILO publications can be obtained in Las Flores 275, San Isidro, Lima 27-Peru, or through PO Box 14-124,

Lima, Peru.

Impreso en el Perú / Printed in Peru

ADVERTENCIA

El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una de las preocupaciones de nuestra Organización.

Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de hacerlo en nuestro idioma.

En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría

utilizar en español o/a para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino genérico clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres.





OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Oficina Regional para América Latina y el Caribe



INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
Regional Office for Latin America and the Caribbean

ESTRATEGIA PARA PROMOVER LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO DE LA OIT

STRATEGY TO PROMOTE THE ILO DECLARATION ON FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND RIGHTS AT WORK

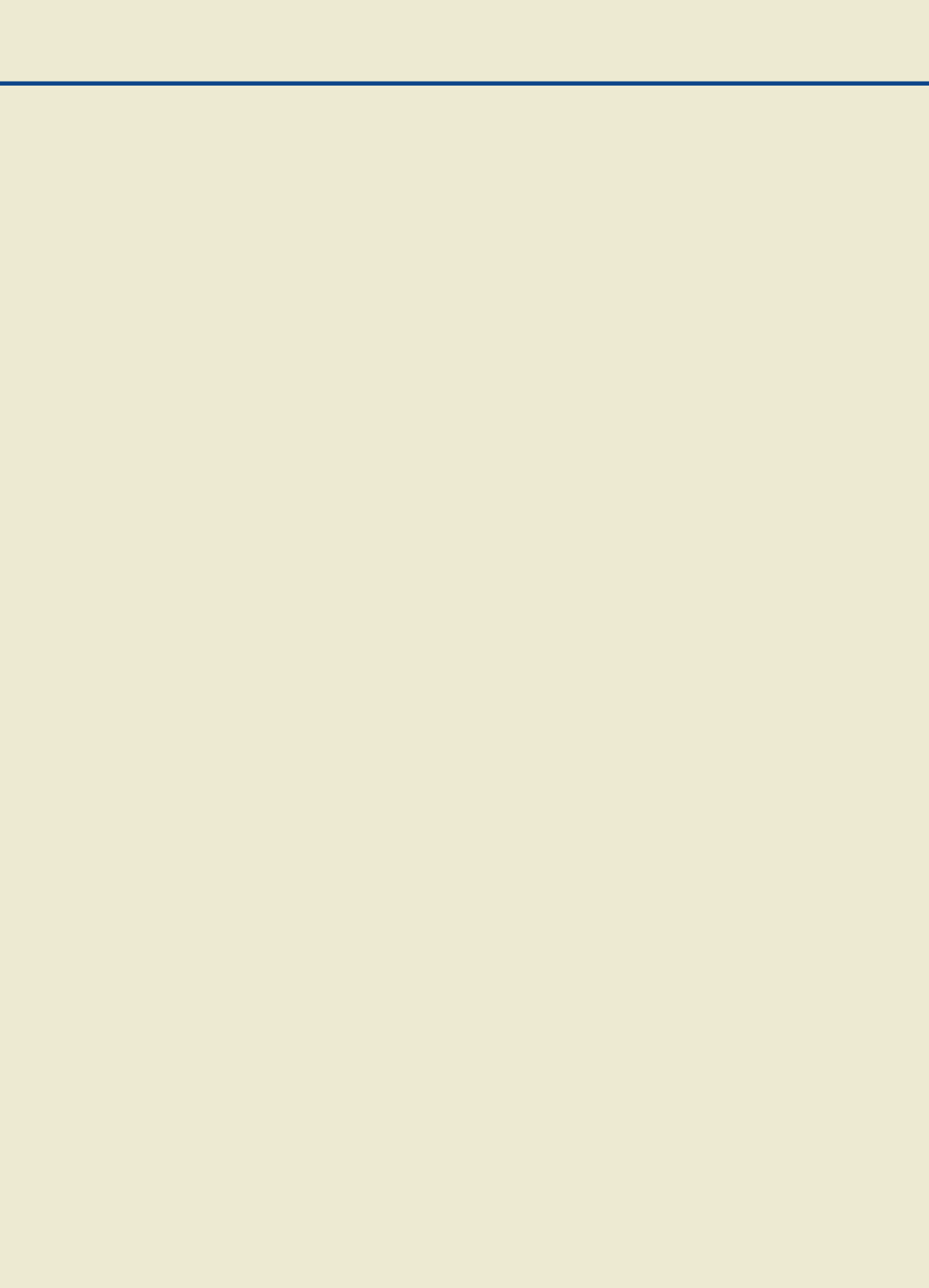
Proyecto Principios y Derechos en el Trabajo en el contexto
de la XIII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de la OEA

Project Principles and Rights at Work in the context
of the XIII Inter-American Conference of Ministers of Labour of the OAS



INDICE

<u>INTRODUCCIÓN</u>	7
<u>EN BÚSQUEDA DE UNA ESTRATEGIA</u>	10
<u>Elementos de un análisis</u>	11
a. <u>Cumplimiento de la legislación relativa a los principios y derechos fundamentales.</u>	11
b. <u>Las instituciones básicas de la aplicación efectiva de los principios.</u>	13
c. <u>Políticas públicas, planes y acciones.</u>	14
d. <u>Los programas y la cooperación y asistencia técnica.</u>	14
e. <u>Los actores sociales.</u>	15
<u>LOS PRIMEROS RESULTADOS</u>	16
<u>SEGUIR AVANZANDO</u>	20



INTRODUCCIÓN

En el contexto de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo se han venido desarrollando en los últimos tres años, toda una serie de documentos sobre la Promoción de la Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT. Este instrumento ha sido también reconocido por las diferentes Declaraciones y Planes de acción de la CIMT, como el documento de referencia legal mínima de los estados americanos en lo relativo al mundo del trabajo. Es decir la Declaración y su implícito compromiso de que se respeten y apliquen una lista de cuatro principios y derechos fundamentales, consensuados por la comunidad internacional (que se corresponden con los ocho Convenios fundamentales de la OIT), es el referente normativo de la acción social de los Ministerios de Trabajo de los países miembros de la OEA.

En este contexto, el Proyecto Principios y Derechos en el trabajo en el contexto de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) de la OEA y a pedido de la XII CIMT-OEA preparó un breve documento promocional y recapitulativo de los trabajos de promoción realizados hasta entonces por los estados miembros de la OIT en las Américas, titulado **Juntos promocionamos nuestros Derechos en el trabajo**.

Desde entonces se han venido incidiendo en las áreas de promoción reflejadas y descritas en el mismo (comunicación pública, seminarios, lanzamiento de informes de la Declaración, cooperación técnica, etc.), tanto en el ámbito nacional como subregional y regional, realizándose campañas publicitarias, afiches, seminarios de difusión, nuevos lanzamientos de los informes de Seguimiento de la Declaración, proyectos de cooperación técnica, nuevos documentos de investigación, mejoramiento de la página web del proyecto de OIT de apoyo a la CIMT, etc., que son el reflejo de esa necesidad de extender el conocimiento de un tema esencial por cuanto se trata de la base normativa laboral de la comunidad internacional.

Las acciones han sido múltiples y el interés por la promoción es aún mas candente como fruto de la firma de los diferentes Tratados de Libre Comercio en las Américas, donde parte de la cooperación técnica diseñada en su entorno, como fruto de sus compromisos, refleja este concepto de promoción y difusión de los derechos, que es esencia misma del mecanismo de Seguimiento de la Declaración.

El cuadro a seguir es una breve recapitulación ejemplificativa de las actividades realizadas desde entonces:

Las mejores prácticas para la promoción de la Declaración en las Américas Julio 2003 - Abril 2005

<i>Actividad / resultado</i>	<i>Descripción</i>	<i>Audiencia</i>	<i>Situación</i>
Documentos de trabajo	Investigaciones encargadas en países del mundo entero sobre cuestiones relacionadas con la Declaración de la OIT relativa a los principios, incluidos igualmente en la página pública de la OIT.	Actores sociales. Órganos e instituciones especializadas. Técnicos o expertos en la materia.	En curso. Actualmente son una veintena de documentos esencialmente en inglés. Existen también en español.
Página web OIT	Http://www.oit.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.INDEXPAGE?var_language=SP .	Trabajadores, empresas, funcionarios implicados en el mundo del trabajo, público en general.	En continua actualización rediseñada en el 2004 con un contenido mas completo.
Campañas de prensa, radio, tv	Diferentes campañas en Perú, Brasil, etc., en particular en relación a los temas de los informes globales.	Trabajadores, empresas, ministerios, público en general.	En función de necesidades y pedidos nacionales expresos.
Seminarios y fichas de trabajo sobre los derechos fundamentales	Diferentes países de la región en coordinación con otros proyecto de la OIT en particular con el proyecto sindicatos y trabajo decente con sede en Lima.	En función del evento.	Material pedagógico distribuido.
Lanzamiento de informe Global	Se realiza de forma anual con despliegue de medios, y a nivel regional. Diversas oficinas de la OIT planifican los eventos en función de la relevancia del tema en su área.	General y de forma particular los actores sociales.	El impacto es notable y se reproduce en prensa nacional y medios nacionales de difusión.
Proyectos de cooperación técnica	Proyectos bi y multilaterales sobre el tema. Para lista de proyectos OIT consultar los proyectos en: http://www.oit.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.PROJECTSLIST?var_language=SP , y las páginas del proyecto IPEC/OIT sobre lo relativo a trabajo infantil. Existen proyectos de cooperación financiados por Canadá (Centroamérica) y EEUU (Chile y Centroamérica) sobre el tema, ver pagina USDOL.	Donantes, organizaciones de trabajadores y empleadores, y otros interesados en la cooperación .	En curso.

No cabe duda que la Declaración adoptada por los Estados miembros de la OIT en 1998, relanzó en el ámbito de las relaciones de trabajo, los principios y derechos recogidos en convenios internacionales con varios años de vigencia, incidiendo en la importancia de los mismos en nuestros días y dándoles un nuevo halito.

En consecuencia, la OIT, los Estados y los actores sociales tienen, en materia de empleo y trabajo, una agenda ya establecida, vinculada a este nuevo instrumento, que los compromete a respetar y a aplicar los principios y derechos fundamentales, buscando lograr su completa efectividad.

Cabe señalar que el ámbito de aplicación de la Declaración es amplio y abarca a toda la población. Por ello, no sólo acoge a los trabajadores que se encuentran en una relación de subordinación o asalariada típica, sino a los trabajadores que desarrollan sus labores de manera autónoma, y a los trabajadores que englobados en la economía informal no están a menudo amparados por las leyes de trabajo. Esta amplitud resulta de especial importancia, ya que generalmente las políticas públicas han estado dirigidas hacia el sector formal subordinado, aún cuando el espectro de trabajadores, donde resulta más necesario la implementación de los principios y derechos fundamentales, es en la práctica más amplio.



EN BÚSQUEDA DE UNA ESTRATEGIA

Fruto del compromiso con la XIII CIMIT, y en el marco de la estrategia de promoción, el proyecto de la OIT de apoyo a la CIMIT, financiado por USDOL y ejecutado desde la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, estableció como prioridades, en el marco de sus actividades, desarrollar dos talleres tripartitos nacionales para la promoción de la Declaración a través del dialogo, así como también realizar dos talleres tripartitos sobre la aplicación de los principios y derechos fundamentales en el contexto de la integración.

La ejecución de los mismos tenía como fin determinar algunos aspectos metodológicos planteados con carácter general por los países, como forma de abordar la aplicación de los principios fundamentales, así como extraer conclusiones comunes sobre posibles fórmulas concretas de aplicación efectiva.

Los seminarios fueron desarrollados en Argentina (octubre 2004), Perú (noviembre 2004), Brasil (diciembre 2004) y Honduras (febrero 2005), con la participación de representantes de los Ministerios de Trabajo, de las organizaciones de trabajadores y empleadores, y otras instituciones interesadas en el tema.

La metodología empleada en todos los seminarios en relación a la aplicación de los derechos fundamentales fue la misma, sin perjuicio que en dos de ellos (Perú y Brasil) se añadiera un enfoque específico sobre los procesos de integración y sus efectos, en tanto que progresó en ese cumplimiento.

El objetivo de todos los eventos fue trabajar sobre diferentes métodos y medidas para hacer efectiva la Declaración de la OIT, así como desarrollar una estrategia para promover conocimiento sobre la aplicación de la Declaración, con énfasis en las prácticas exitosas en la puesta en práctica de sus principios. La realización de un taller nacional para debatir sobre el grado de aplicación de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT, las acciones prácticas desarrolladas, en curso y a desarrollar en cada uno de los principios, las tendencias y perspectivas para promover el respeto a la Declaración de la OIT, constituye una actividad altamente relevante en el contexto de la XIII CIMIT, en términos de la promoción de la Declaración de la OIT como factor de desarrollo socioeconómico y de paz social. Se trata sin duda de una contribución del Proyecto OIT-CIMIT para el cumplimiento de los mandatos de los Ministros de Trabajo de las Américas emanados en la Declaración y Plan de Acción de Salvador.

Existe, en general, un constatado déficit en la región en lo relativo a la aplicación efectiva de los convenios fundamentales en los países que los ratificaron (y que son una amplia mayoría), y de hecho se releva un problema general en relación a la efectividad de los principios que los sustentan y que están en el origen de la Declaración de la OIT. Es decir, el problema no está en el grado de ratificación de los convenios por los países del hemisferio americano, sino en su nivel de

aplicación, de cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales en el trabajo, tanto por la no-observancia de la ley, como por la existencia de amplios sectores ocupacionales no cubiertos por la legislación laboral.

Los mecanismos de puesta en práctica y aplicación en el ámbito nacional son insuficientes y sus recursos humanos carecen de formación adecuada. En general se aprecian administraciones de trabajo débiles y, por tanto, poco efectivas que encuentran dificultades para formular políticas adecuadas y darles el seguimiento correspondiente. Los países de la región requieren mejorar el nivel de aplicación de las normas y compromisos laborales incorporados en los acuerdos de integración, siendo necesario fortalecer a las administraciones de trabajo y a los actores sociales.

Por lo tanto, mejorar la aplicación de las normas relativas a los derechos fundamentales en el trabajo requiere no sólo del fortalecimiento de las instituciones del sistema de administración del trabajo, sino también del desarrollo de actividades (seminarios, talleres, campañas, etc.) orientadas a fomentar la comprensión de que el respecto a esos derechos, además de una obligación ética y social, es también un requisito fundamental para la estabilidad política y la inversión económica.

Partiendo de estas premisas y a efectos de determinar el grado de efectividad de los principios y derechos contenidos en la Declaración se procedió a evaluar entre otros, una serie de aspectos que resumimos a continuación.

Elementos de un análisis

a. Cumplimiento de la legislación relativa a los principios y derechos fundamentales.

Esencialmente este aspecto se intenta determinar a través del examen de varios puntos básicos:

- *Cumplimiento de la legislación en relación a sus compromisos legales internacionales.*

Si bien se trata de un aspecto formal, una base importante es, en primer lugar, conocer si el país ha ratificado los convenios de OIT relacionados con los principios y derechos fundamentales, ya que dicha ratificación trae consigo compromisos específicos determinados en la Constitución de la Organización.

En caso de no existir la ratificación, que es necesario destacar no es obligatoria para los Estados Miembros de la OIT, se deberán valorar los diversos esfuerzos y acciones nacionales en pos del cumplimiento efectivo de los principios y derechos (obligación de respeto y promoción que dimana de la Constitución y de la Declaración de Principios y Derechos fundamentales y que vincula a todo Estado Miembro), para lo

cual se recurrirá a las informaciones contenidas en las memorias que forman parte del Seguimiento de la Declaración y que conforman el Informe Anual.

En ambos casos y sin perjuicio de las memorias gubernamentales (de muy diferente naturaleza en ambos casos, tanto por contenido como por implicaciones), los comentarios de trabajadores y empleadores previstos en ambos sistemas (de control y seguimiento respectivamente), deben ser especialmente considerados como fuente informativa.

En el caso de haberse ratificado uno a varios Convenios fundamentales, las eventuales observaciones, solicitudes directas, o recomendaciones de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo son primordiales para su seguimiento, ya que su contenido proporciona indicios importantes sobre la aplicación de los derechos a nivel nacional, sus progresos y sobre sus lagunas, así como sobre los problemas prácticos que desde esa perspectiva, el país debe solucionar.

Es importante considerar así mismo las recomendaciones y conclusiones del Comité de Libertad Sindical (sólo sobre el principio de libertad sindical y reconocimiento efectivo de la negociación colectiva con independencia de la ratificación), de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, así como las recomendaciones del Consejo de Administración en relación a las quejas por incumplimiento de Convenios, así como cualquier otro procedimiento de control previsto en la Constitución de la OIT.

A ellos y de modo complementario, se podrá añadir la jurisprudencia internacional sobre el tema, como por ejemplo la resultante de la Corte Interamericana y otros organismos internacionales de Derechos Humanos, que con valor jurídico diferente al de las recomendaciones de la OIT, permiten también detectar los problemas legales y prácticos de la efectividad del principio.

La información contenida en los Informes Globales que son también parte del Seguimiento de la Declaración, y que abarca a todo el mundo es también de referencia, más cuando se encuadra en un marco general que indica tendencias y cambios.

- ***Cumplimiento y supervisión de la legislación nacional.***

El grado de cumplimiento de los principios y derechos pasa también por

evaluar internamente con medios propios la regulación promulgada en el país y determinar si sirve para atender a las necesidades reales existentes. Con esta finalidad debe generarse una metodología de seguimiento de la aplicación de la legislación y los efectos que tiene ésta en la promoción y desarrollo de los derechos que debe adaptarse a las necesidades, cultura y desarrollo nacionales.

A efectos de cumplimiento deberá en primer lugar atenderse las sentencias judiciales, desde dos puntos de vista. En primer lugar, la labor de las resoluciones judiciales debe ser evaluada a efectos de conocer si los derechos y principios fundamentales han sido acogidos o si son utilizados en la fundamentación, o las resoluciones judiciales demuestran indiferencia o una posición contraria frente a los convenios internacionales. En segundo lugar, los propios resultados de las sentencias, a efectos de determinar si las resoluciones judiciales establecen una adecuada protección de los derechos y principios fundamentales.

Las decisiones administrativas de órganos de control nacional como son las actas de inspección de trabajo son también un elemento esencial de seguimiento. La inspección puede realizar una labor pedagógica de divulgación y difusión en la normativa vigente, además de la función de control de aplicación de la legislación que evidentemente le corresponde por naturaleza. Es indispensable que exista una inspección eficaz y formada y con recursos suficientes no sólo para garantizar la función de control, sino para propiciar la prevención de los posibles problemas.

b. Las instituciones básicas de la aplicación efectiva de los principios.

Además de los aspectos legales y de su interpretación y desarrollo, se deberán considerar otra serie de elementos esenciales prácticos, para garantizar una aplicación efectiva.

Existencia de una administración de trabajo eficaz. La administración y, en particular, la inspección tienen, como ya se señaló, un papel básico en la supervisión y en la promoción de la aplicación de los principios fundamentales. Su capacidad efectiva y su eficacia son puntos trascendentales. Hay una serie de organismos públicos en el ámbito social a los que corresponden determinadas funciones de apoyo, supervisión o control en el campo de las relaciones laborales y cuyo correcto funcionamiento puede aportar beneficios indudables al desarrollo de mejores relaciones. El problema fundamental en algunos países de la región responde a una cierta tendencia a la excesiva intervención de estos órganos en el desarrollo de las relaciones bipartitas.

Además, la administración de trabajo es en algunos países de la región, lenta

y poco expeditiva.

Otros servicios administrativos como los de solución de conflictos, los registros oficiales, o los sistemas de información deben ser así mismo operativos, prestando funciones efectivas y funcionales que permita el cumplimiento de sus objetivos.

Estadísticas adecuadas que permitan trabajar sobre bases reales. Uno de los problemas fundamentales encontrados a nivel nacional es la falta de datos estadísticos que ayuden en la toma de decisiones tanto de los organismos estatales como para la propia ciudadanía. En consecuencia, por un lado, las estadísticas servirán para evaluar la evolución de la protección de los principios y derechos fundamentales, y por otro lado, como información vital para la elaboración de planes, programas y desarrollo de políticas públicas. La existencia de fuentes de información, públicas y disponibles es esencial para el desarrollo de relaciones laborales adecuadas. La existencia de estadísticas nacionales y/o sectoriales sobre tasas de afiliación, cobertura de la negociación colectiva, conflictos, empleo, desempleo etc., permite el desarrollo correcto de una política general en esta materia.

c. Políticas públicas, planes y acciones.

En este rubro se evalúa qué ejecuta principalmente el Poder Ejecutivo y los demás estamentos del Estado descentralizado, más allá de la ley a través de acciones programáticas o de objetivos concretos que sirven para enfocar, desarrollar y ejecutar los principios fundamentales.

La existencia de un Plan nacional sobre un tema concreto, como por ejemplo la igualdad, determinará un objetivo político nacional expreso y es esencial el estudio de sus elementos para estudiar el desarrollo de ese principio.

d. Los programas y la cooperación y asistencia técnica.

Existen programas nacionales y otros ejecutados con apoyo internacional que facilitan el progreso de las acciones nacionales y que normalmente se ligan a objetivos concretos de seguimiento. El hecho de tener un programa o un proyecto denota una voluntad política expresa y un reconocimiento de sus necesidades y su voluntad de superarlas. Muestra de ello son los programas de cooperación ligados a los TLC en la región donde el déficit en el cumplimiento de derechos se suple en cierta forma con programas a medida de las necesidades nacionales y con financiamiento de los países más desarrollados.

Es necesario mencionar que no tener un proyecto no es un aspecto negativo, pues puede deberse a factores de coyuntura (no reúne requisitos económicos del donante, por ejemplo).

e. Los actores sociales.

En este punto resulta relevante tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, si los actores sociales, básicamente las organizaciones de trabajadores, organizaciones de empleadores y sus representados, son adecuadamente informados sobre lo relativo a los principios y derechos fundamentales, ya que no es posible plantear el cumplimiento de la normativa si es que no existe una adecuada información sobre la misma.

En segundo lugar, debe evaluarse el compromiso de los actores sociales en el cumplimiento de los derechos y principios fundamentales. Nos referimos al compromiso reflejado tanto al interior de sus organizaciones como en el trabajo conjunto con el sector público para la aplicación de los mencionados principios. Esto revela dos aspectos importantes, por un lado, que el cumplimiento no es tema que atañe únicamente al Estado, sino que la sociedad civil se involucra a efectos de lograr el cumplimiento sostenido de la normativa, y por otro lado, que las posibilidades de lograr las metas es mayor. En este caso debe evaluarse los instrumentos que se utilizan, por ejemplo, el diálogo social, o las mesas de concertación.

Es necesario por último indicar que cada uno de los aspectos mencionados podría ser evaluado de manera independiente teniendo como base la situación ideal, de tal manera que para llegar a ella se puede establecer metas concretas en periodos determinados. Asimismo, la evaluación debe hacerse de manera conjunta, otorgándole un peso determinado a cada uno de los aspectos, de tal manera que se pueda comparar y determinar cuáles son los aspectos en los que hay que incidir más. En todo caso esta evaluación es instrumental y sobre bases voluntarias y se compone de elementos de análisis que deberán adecuarse a cada caso concreto. El método es un instrumento de estudio, y es cada país y los actores involucrados los que deben determinarlo.



LOS PRIMEROS RESULTADOS

Los talleres realizados proporcionaron algunos resultados importantes que sirven sin duda como elementos de reflexión en nuestra búsqueda de una estrategia común.

En todos se formularon **algunas conclusiones** que constatan una serie de evidencias. A modo de sumario estas serían algunas de las más relevantes:

1. Así por ejemplo se constató que la Declaración de Derechos y Principios Fundamentales es un eje determinante para la discusión y desarrollo de las relaciones laborales y la protección del trabajo a nivel nacional ya que además de su valor intrínseco refuerza y completa los compromisos adquiridos por los países con la previa ratificación de los Convenios fundamentales. La discusión de políticas públicas sobre esta materia pasa necesariamente por considerar la aplicación de la Declaración y de los Convenios de la OIT que la complementan.
2. En materia legal se observa que existe un desarrollo normativo importante sobre los derechos fundamentales en la región, teniendo como base constituciones que los tratan, en términos generales, adecuadamente. No obstante, todavía existe una agenda pendiente en materia de legislación ordinaria que desarrolle los preceptos constitucionales o actualice dicha legislación.
3. Los países en la región tienen en general un alto índice de ratificación de los convenios fundamentales, sin embargo, se han recibido en los últimos años observaciones y recomendaciones por parte de los órganos de la OIT, reflejando algunas violaciones de carácter eminentemente legal. En este contexto tiene especial importancia el número importante de quejas y de observaciones realizadas de modo reiterado en materia de libertad sindical (aunque no hay que olvidar que es el único principio que cuenta con un mecanismo específico al respecto).
4. Algunas de las observaciones y recomendaciones realizadas por la OIT han sido cumplidas e inclusive han merecido modificaciones a nivel legislativo, sin embargo, si se constata una demora importante en reparar dichos incumplimientos.
5. Hace falta una mayor difusión de los principios y derechos fundamentales contenidos en la Declaración de la OIT, en particular para que sean aplicados por los jueces y otros operadores de la justicia.
6. Existe la necesidad de elaborar, difundir e implementar políticas públicas, planes y programas referidos al desarrollo de los derechos y principios fundamentales. Además existen diversos aspectos que no han sido trabajados y estudiados, que podrían ser sumamente útiles para determinar

políticas, consensos, etc. Es decir, es necesario realizar una mayor investigación sobre la realidad a efectos de poder adoptar las decisiones más correctas con la finalidad de lograr un grado mayor de aplicación de los principios y derechos fundamentales del trabajo.

Como **propuestas de trabajo** los talleres consideraron establecer medios de trabajo y acción específicos donde se valoró la necesidad de trabajar en algunas áreas concretas.

1. Se consideró que existía un número importante de ciudadanos que no cuenta con información o cuya información es insuficiente en materia de principios y derechos fundamentales, y de cómo su vigencia puede tener un efecto importante en el desarrollo del país. Asimismo, no se tiene información sobre el tratamiento y los efectos que tendría los procesos de integración y los acuerdos comerciales internacionales en los derechos y oportunidades de los ciudadanos, y especialmente en la aplicación y mejora de los derechos y principios fundamentales.
2. La información que debe brindarse está relacionada con el contenido de la Declaración, las observaciones y recomendaciones de los órganos de la OIT, los estudios que se realizan en OIT o fuera de ella, las experiencias de otros países en el fomento de los principios y derechos fundamentales, los Informes Globales de seguimiento de la Declaración, los informes de IPEC, guías o pautas sencillas o ejemplos prácticos que denoten el contenido de los principios y derechos fundamentales, etc.
3. Es un deber del Estado y de las organizaciones sindicales y gremios empresariales de brindar a la ciudadanía y a sus afiliados la información completa y oportuna.
4. Para estos efectos debe crearse una red de información sobre los derechos y principios fundamentales, que podrían estar alimentada, por los tres actores señalados, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo. Los objetivos son cuantitativos y cualitativos, esto es, en lo cuantitativo establecer metas de personas que tienen que haber escuchado o leído sobre los derechos y principios fundamentales. En lo cualitativo, el objetivo es promover un mayor análisis de la información, un mayor análisis sobre la temática y lograr que se discuta el tema en ciertos espacios.
5. Para estos efectos además de la generación de la red, se utilizaría diversos mecanismos para brindar la información (medios de comunicación, web, etc.).
6. Asimismo, se debería evaluar la posibilidad de establecer estadísticas especiales para medir la situación de los derechos y principios fundamentales y asimismo, medir el impacto de las políticas públicas relacionadas con el tema, así como la realización de estudios especiales.

7. La educación en materia de derechos fundamentales es un elemento de especial interés y ya existen al respecto algunas experiencias (un proyecto elaborado por la Oficina Subregional de la OIT para los Países Andinos, y en Argentina¹). Si los estudiantes conocen de dichos principios y derechos, se discuten en clase y se internalizan, es posible que el efecto sea una ampliación del conocimiento sobre los mismos, un interés sobre ellos y la posibilidad que su discusión y divulgación sea sostenible en el tiempo.
8. Asimismo, es importante considerar la concepción de una metodología de la aplicación de los derechos fundamentales, que debería servir para determinar los puntos débiles y los instrumentos para fortalecerlos.
9. Es necesario crear un círculo virtuoso en el cumplimiento de la normativa, para lo cual, el Estado conjuntamente con la sociedad civil deben crear instrumentos en los que se puede medir concretamente los avances o retrocesos de la normativa, lo cual además sirve para adoptar medidas. En este aspecto, dichos instrumentos deben ser pensados de manera regional, de tal modo que debe involucrarse a instancias de gobierno más allá del Poder Ejecutivo.
10. El diálogo social es el principal instrumento de difusión de los principios y derechos fundamentales. Existiendo experiencias importantes de diálogo social en algunos países, estas deben ser aprovechadas a efectos de que se constituyan en los espacios de difusión y discusión de los principios y derechos fundamentales. También estos espacios podrían ser una oportunidad para que trabajadores y empleadores puedan acordar un instrumento en el que se obliguen a difundir la Declaración así como fomentarlo y buscar un mayor cumplimiento de los derechos y principios fundamentales.
11. Asimismo, hay que relacionarlo con otras instancias vinculadas por ejemplo a la competitividad del país. Esto es, como la aplicación de la Declaración sirve para mejorar la competitividad del país.
12. El fortalecimiento del Ministerio de Trabajo es un tema central tanto en relación a la labor preventiva (difusión), fiscalizadora (inspección) y sancionadora. Esto implica que el tema de los principios y derechos fundamentales sea transversal a todos los programas y direcciones del Ministerio, a efectos de que se tomen en cuenta en la elaboración de las diversas actividades.
13. Es también necesario fortalecer la capacidad institucional de las entidades estatales y de las organizaciones privadas para elaborar políticas públicas que tengan relación con la aplicación de los principios y derechos fundamentales. La base de esto es la generación y fortalecimiento de los mecanismos de cooperación y coordinación, y

¹Se trata del Proyecto "Construyendo el futuro con trabajo decente", con la finalidad de incorporar el contenido de la Declaración a la currícula de las escuelas de enseñanza media argentina.

transferencia de información.

14. La Declaración debe potenciarse en el marco de los procesos de integración, considerando que es una base fundamental para la dimensión laboral de estos procesos, y que es el pilar de una adecuada integración que evite desigualdades.
15. También es importante recoger y divulgar las buenas prácticas en la implementación y desarrollo de los principios de la Declaración en el ámbito de los acuerdos de integración regional.
16. Por último se recomienda el aprovechamiento del espacio de integración regional para construir indicadores de seguimiento y mecanismos de cumplimiento de la Declaración.

SEGUIR AVANZANDO

Han transcurrido dos años desde el último informe sobre el tema que nos ocupa y los derechos fundamentales en el trabajo se consolidan como una prioridad. Su aplicación y los medios de asegurar su efectividad se convierten en una necesidad para garantizar la buena gobernanza global, y en particular al desarrollo de la dimensión laboral en el hemisferio americano en el contexto del Proceso de Cumbre de las Américas.

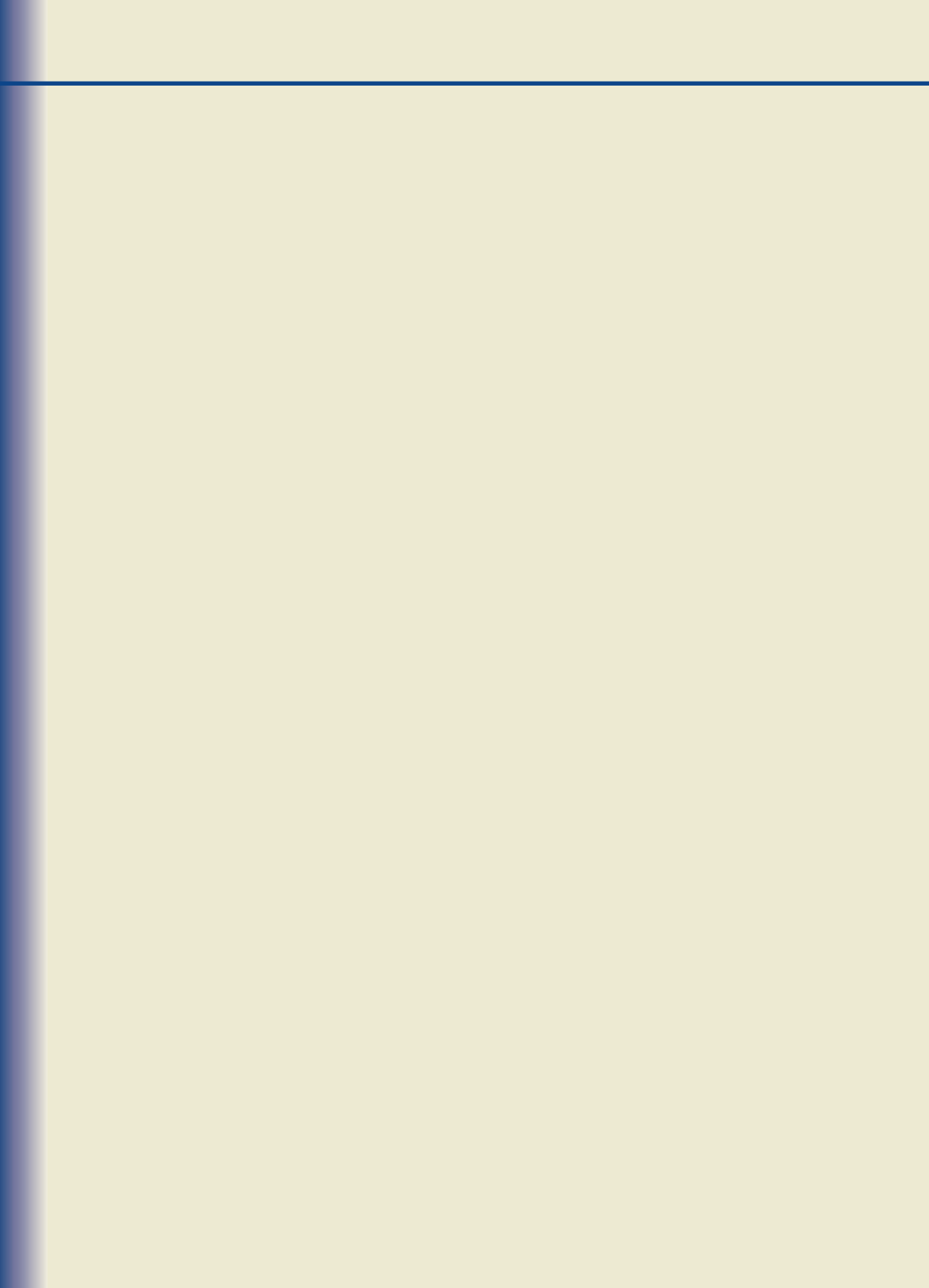
Los principios y derechos fundamentales en el trabajo son la expresión de la libertad del individuo en el desempeño de su actividad productiva y profesional, y sin duda los pilares en que se sustenta el trabajo decente. Sin embargo, queda pendiente establecer el mejor medio de progresar en su efectividad. Nuestra tarea es identificar elementos, vías y metodologías. La de los países es la de encontrar de forma tripartita la mejor manera de cumplirlos, respetando sus necesidades y nivel de desarrollo.

El trabajo avanza y cada vez se perfila más claramente la idea de la aplicación. Solo aplicando los derechos conseguiremos el ideal constitucional de la OIT de la justicia social.



TABLE OF CONTENTS

<u>INTRODUCTION</u>	23
<u>IN SEARCH OF A STRATEGY</u>	26
<u>Elements of an analysis</u>	27
<i>a. Compliance with legislation on the fundamental principles and rights.</i>	27
<i>b. Basic institutions in the effective application of the principles.</i>	29
<i>c. Public policies, plans and actions.</i>	30
<i>d. The programs and technical cooperation and assistance.</i>	30
<i>e. The social actors.</i>	30
<u>THE INITIAL RESULTS</u>	32
<u>CONTINUE ADVANCING</u>	35



INTRODUCTION

A series of documents have been prepared over the past three years within the framework of the Inter-American Conference of Ministers of Labour in regard to the Promotion of the ILO Declaration on Fundamental Principles and Right at Work. The various IACML Declarations and Plans of Action also recognize this instrument as the minimum legal reference document of the American states on the working world. In other words, the Declaration and its implicit commitment to respect and apply a list of four fundamental principles and rights (corresponding to the eight fundamental ILO Conventions) that enjoy the consensus of the international community, is the regulatory reference for the social action of the Labour Ministries of the OAS Member Countries.

The Principles and Rights at Work Project, within the framework of the Inter-American Conference of Ministers of Labour (IACML) of the OAS and at the request of the XII IACML-OAS, drafted a short promotional document on the subject under the title of **Promoting our Rights at work, together**, recapitulating the promotional efforts of the ILO Member States in the Americas up until that moment.

Since then, national, subregional and regional promotional efforts have been made in the areas covered by and described in that document (public communications, seminars, launching of reports on the Declaration, technical cooperation, etc.). These include publicity campaigns, posters, dissemination seminars, new launchings of reports on the Follow-up to the Declaration, technical cooperation projects, new research documents, and improvement of the ILO's IACML support project website, among other things, which reflect the need for more widespread understanding of a subject that is essential in that it constitutes the basis for the international community's labour standards.

Many actions have been taken and the signing of various Free Trade Agreements in the Americas has fanned interest in promotion for, as a result of the commitments made, the technical cooperation measures designed in those Agreements call for promoting and disseminating the rights that are the very essence of the Follow-up mechanism to the Declaration.

By way of example, the table below contains a short recapitulation of the activities carried out since then:

The best practices for promoting the Declaration in the Americas July 2003 - April 2005

<i>Activity / Result</i>	<i>Description</i>	<i>Audience</i>	<i>Status</i>
Working documents	Research papers commissioned throughout the world on issues relating to the ILO Declaration on principles and also posted at the ILO's website.	Social actors. Specialized bodies and institutions. Technicians or experts on the subject.	Underway. At present there are about twenty documents, essentially in English and with a Spanish version as well.
ILO Website	Http://www.oit.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.INDEXPAGE?var_language=SP .	Workers, companies, and officials involved with the working world and the general public.	Continuously being updated. Redesigned in 2004 to allow for a fuller content.
Newspaper, radio and television campaigns	Different campaigns in Peru, Brazil, etc., particularly with regard to the subjects addressed in the global	Workers, companies, ministries, and the general public.	In accordance with express national needs and requests.
Seminars and background cards on the fundamental rights.	Different countries in the region in coordination with other ILO projects, particularly the Lima-based trade unions and decent work project.	In accordance with the particular event.	Teaching material distributed.
Launching of the Global Report	Conducted annually at the regional level, with a media display. Various different ILO offices plan the events according to the importance of the subject to their particular area.	General and the social actors in particular.	The impact is considerable and is reproduced in the national press and media.
Technical cooperation projects	Bi and multilateral projects on the subject. See the following website for a list of ILO projects: http://www.oit.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.PROJECTSLIST?var_language=SP and the IPEC/ILO project web pages with regard to child labour. See the USDOL website for technical cooperation projects on the subject financed by Canada (Central America) and the U.S. (Chile and Central America).	Donors, workers' and employers' organizations, and others that are interested in cooperation.	Underway.

It is undeniable that the Declaration adopted by the ILO Member States in 1998 relaunched, within the sphere of working relations, the principles and rights set out in international conventions of several years' standing, adding to their importance today and giving them new life.

As a result, the ILO, the States and the social actors have an already established agenda connected with this new instrument that commits them to respect and apply the fundamental principles and rights in an effort to make them fully effective.

Attention should be drawn to the fact that the sphere of application of the Declaration is broad and covers the entire population. For that reason, it applies not only to workers in a subordinate or typical wage-earning relationship, but also to autonomous workers and workers who, as part of the informal economy, are frequently not covered by labour laws. The scope of this sphere is especially important, for public policies generally target the subordinate formal sector only, although the sphere of workers in which the implementation of the fundamental principles and rights is most necessary is much broader in practice.



IN SEARCH OF A STRATEGY

As a result of its commitment to the XIII IACML, and within the context of the promotional strategy adopted, the ILO IACML support project financed by the USDOL and executed under the aegis of the ILO Regional Office for Latin America and the Caribbean, established as priorities among its activities, the holding of two national tripartite workshops to promote the Declaration through dialogue and two tripartite workshops on the application of the fundamental principles and rights within the integration processes.

The purpose of those workshops was to decide upon several general methodological aspects proposed by the countries as a means of undertaking the application of the fundamental principles and of reaching common conclusions regarding possible concrete formulas for their effective application.

The seminars were held in Argentina (October 2004), Peru (November 2004), Brazil (December 2004) and Honduras (February 2005), with the participation of representatives of the Ministries of Labour, the workers' and employers' organizations, and other institutions interested in the subject.

The same methodology for the application of the fundamental rights was used in all the seminars, although two of them (Peru and Brazil) added a specific approach to integration processes and their effects, as they moved towards fulfilling their aim.

The purpose of all these events was to work out different methods and measures to ensure the effective application of the ILO Declaration and to develop a strategy for fostering fuller knowledge about the Declaration's application, with emphasis on successful practices in implementing its principles. A highly important activity for the XIII IACML in terms of promoting the ILO Declaration as an element of socio-economic development and social peace is the holding of a national workshop to discuss the degree of application of the ILO's Fundamental Principles and Rights at Work and the practical actions taken, underway and to be taken in regard to each of the principles, and trends in and prospects for promoting respect for the ILO Declaration. This is without a doubt a contribution of the ILO-IACML Project towards the fulfilment of the mandates handed down by the Ministers of Labour of the Americas in the Declaration and Plan of Action of El Salvador.

Generally speaking, the region shows a noticeable deficit in the effective application of the fundamental conventions by the countries that ratified them (which are in the majority) and there is a general problem regarding the effectiveness of their underlying principles, on which the ILO Declaration is erected. The problem lies not in the degree of ratification of those conventions by the countries in the American hemisphere, but in their level of application and in the effective compliance with the fundamental rights at work, both because the law fails to be observed and because broad sectors of occupation are not covered

by labour legislation.

There is a shortage of mechanisms at the national level to put those conventions into practice and ensure their application and the human resources involved have not been given proper training. Some labour administrations have been found to be weak and therefore ineffective in formulating appropriate policies and following them up. Countries in the region need to improve their level of application of the labour standards and commitments incorporated into the integration agreements. As a result, it is necessary to reinforce the labour administrations and social actors.

In order to improve the application of the standards associated with the fundamental rights at work, not only must the institutions of the labour administration system be built up, but activities (seminars, workshops, campaigns, etc.) must be carried out to contribute to the understanding that respect for such rights is not only an ethical and social obligation, but also a basic requirement for political stability and economic investment.

A series of aspects were evaluated in the light of these premises and to determine the degree of effectiveness of the principles and rights contained in this Declaration and are summarized below.

Elements of an analysis

a. Compliance with legislation on the fundamental principles and rights.

This compliance will essentially be determined by examining various basic aspects:

- ***Compliance with legislation in connection with international legal commitments.***

Although this aspect is purely formal, it is important to first know whether the country has ratified the ILO conventions concerning the fundamental principles and rights, for that ratification bears with it certain specific commitments defined in the Organization's Constitution.

If the country has not ratified the conventions --and it must be stressed here that such ratification is not compulsory for ILO Member States-- the various national efforts and actions aimed at effectively complying with the principles and rights (the obligation to respect and promote them emanates from the Constitution and the Declaration of Fundamental Principles and Rights that are binding on all Member States) must be evaluated by studying the information contained in the reports issued as part of the Follow-up to the Declaration and that comprise the Annual Report.

In both cases, and irrespective of the contents of government reports (of a very different nature in the two cases, as to both contents and implications), the comments of workers and employers provided for in the two systems (control and follow-up, respectively) must be given special consideration as a source of information.

If a country has ratified one or several fundamental conventions, then the possible observations, direct requests or recommendations of the International Labour Organization's control bodies are of primary importance for following them up, inasmuch as their contents will provide important indications regarding the application of those rights at the national level, the progress made and any possible gaps, as well as any practical problems the country needs to resolve in that regard.

It is also important to consider the recommendations and conclusions of the Committee on Freedom of Association (only on the principle of freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining not associated with the ratification), the Conference Committee on the Application of Standards with regard to complaints over failure to comply with Conventions, together with any other control procedure provided for in the ILO Constitution.

These could be supplemented by international jurisprudence on the subject, such as, for example, that emanating from the Inter-American Court and other international Human Rights organizations that would also make it possible to detect any legal or practical problems regarding the effectiveness of the principle, using a legal value different from that of the ILO recommendations.

The information contained in the Global Reports that are also part of the Follow-up to the Declaration, and which cover the entire world, can also be used for reference purposes, above all when it coincides with a general frame of reference indicative of trends and changes.

- ***Compliance with and supervision of national legislation.***

Determining the degree of compliance with the principles and rights also means evaluating internally the regulations enacted in the country, using one's own means, to find out whether these are enough to meet existing real needs. A methodology should be devised tailored to national needs, culture and development, in order to follow up the application of the legislation and its effects on promoting and developing those rights.

To determine that compliance, legal sentences must be considered, using two different approaches. First, the legal sentences must be

evaluated in order to determine whether the fundamental principles and rights have been respected and whether they are used in the justification for those sentences or whether those legal sentences reveal an indifference or are contrary to international conventions. And second, the results of the sentences must be evaluated to see whether they adequately protect the fundamental rights and principles.

Administrative decisions of national control bodies, such as labour inspection reports, are another essential element in the follow-up. That inspection may perform the educational role of disseminating existing legal provisions, in addition to its natural function of controlling the application of legislation. Efficient and organized inspection is essential, involving enough resources to both ensure its control function and contribute towards preventing possible problems.

b. Basic institutions in the practical and effective application of the principles.

To ensure the effective application of the principles, it is necessary to consider another series of practical and essential elements, in addition to the legal aspects and their interpretation and development.

Existence of an effective labour administration. As already pointed out, administration and, particularly, inspection have a basic role to play in supervising and promoting the application of the fundamental principles and their effective capacity and effectiveness are essential elements. A series of public institutions operating in the social sphere that have specific support, supervisory or control functions to fulfil in the area of labour relations and their correct operation are definitely able to contribute to better labour relations. Even so, excessive intervention by these institutions in the development of bipartite relations is a fundamental problem in some of the region's countries.

In addition, labour administration in some countries of the region is sluggish and shows little efficiency.

In order to fulfil their objectives, other administrative services, such as dispute settlement, official registers, or information systems need to be effective and functional.

Adequate statistics that make it possible to operate on real bases. The shortage of statistical data to support decision-making by both State bodies and the citizens themselves is one of the basic problems noted in some countries. Statistics are used to evaluate how the protection of fundamental principles and rights evolves, on the one hand, and, on the other, as vital information for preparing and carrying out public policies, plans, and

programs. In order for appropriate labour relations to develop, public and available information sources are needed. National and/or sectorial statistics on membership rates, collective bargaining coverage, disputes, employment, unemployment and so forth, make it possible to properly implement a general policy on the subject.

c. Public policies, plans and actions.

The evaluation in this area will concentrate mainly on the efforts of the Executive and of the other levels of the decentralized State that serve to focus on, develop and carry out the fundamental principles by means of programmed actions or through specific objectives, above and beyond the law.

The existence of a national Plan on a specific issue, such as equality, for example, will reveal an express national political objective and it is essential to examine its elements in order to study the development of that principle.

d. The programs and technical cooperation and assistance.

There are country programmes and others that are executed with international assistance that facilitate the progress of national actions and that are normally connected with specific follow-up objectives. Having such a programme or project reveals the existence of an express political will and of recognition of needs and of the will to meet them. An example of this are FTA-linked cooperation programmes in the region that tend to compensate to some extent for failure to comply with labour rights through programmes adjusted to national needs and financed by the more developed countries.

It should be mentioned that not having a project is not necessarily a negative aspect, for this may be due to temporary aspects (inability to fulfil the donor's economic requirements, for example).

e. The social actors.

Several aspects should be borne in mind under this point. In the first place, it is important to know whether the social actors --basically workers' organizations, employers' organizations and their representatives are adequately informed about the fundamental principles and rights, because compliance with principles cannot be advocated if appropriate information about the subject is unavailable.

In the second place, the commitment of the social actors to comply with the fundamental rights and principles needs to be evaluated. We are referring both to the commitment made within their organizations and to their joint efforts with the public sector to apply those principles. This reveals two

important aspects: on the one hand, that the State is not responsible for that compliance on its own, but that the civil society involves itself in order to attain sustained compliance with the principles; and on the other, that it offers a greater possibility to reach the goals. In this case, it is important to evaluate the instruments that are used, such as, for example, social dialogue or committees that are set up for concerted efforts.

To conclude, it should be mentioned that each of the aspects mentioned could be evaluated independently in terms of the ideal situation, in such a way that concrete goals could be set to be reached within specific timeframes, in order to progressively arrive at that ideal situation. The evaluation should be comprehensive and each aspect should be assigned a given weight, so that they are all comparable and it will be possible to determine which aspects need most work. In any case, this evaluation is instrumental, conducted on voluntary bases and comprised of elements of analysis that should be adjusted to each specific case. The method to be used is an instrument requiring study and should be determined by the country and the actors involved.



THE INITIAL RESULTS

The workshops that have been held yielded some important results that will doubtlessly serve as elements for reflection in our search for a common strategy.

Each workshop formulated **some conclusions** that confirm a series of facts. Some of the most important are summarized below:

1. By way of example, it was confirmed that the Declaration of Fundamental Principles and Rights is a decisive core element for the discussion and development of labour relations and the protection of labour at the national level, for in addition to its intrinsic value, it reinforces and completes the commitments acquired by the countries with the prior ratification of the fundamental Conventions. The discussion of public policies on the subject must necessarily consider the application of the Declaration and of the ILO Conventions that complement it.
2. Legally-speaking, fundamental rights in the region show important regulatory development, based on constitutions that deal appropriately with those rights in general terms. Even so, a pending agenda of regular legislation to expand upon the constitutional precepts or to update that legislation still exists.
3. Countries in the region generally exhibit a high rate of ratification of the fundamental conventions. Notwithstanding, observations and recommendations have been received in recent years from ILO bodies, reflecting some violations that are highly legal in nature. In this context, the sizable number of complaints and observations repeatedly made with regard to freedom of association is particularly important, although it should not be forgotten that this is the only principle for which a specific mechanism has been established.
4. While some of the ILO's observations and recommendations have been fulfilled and in some cases have even resulted in legislative changes, long delays in rectifying those failures to comply have been noted.
5. The fundamental principles and rights contained in the ILO Declaration need wider dissemination, particularly so that judges and other justice operators will apply them.
6. Public policies, plans and programmes are needed to develop the fundamental rights. There are still some aspects that have not yet been addressed or studied that could be extremely useful in determining policies, consensus and the like. In other words, further investigation of the situation is needed so that correct decisions may be reached in order to attain wider application of fundamental labour principles and rights.

As **work proposals**, the workshops considered establishing specific working methods and means of action in which the need to work in concrete areas was deemed advisable.

1. The fact that there are a large number of citizens who have little or no information about fundamental principles and rights was considered, together with how the continued existence of this situation could have an important effect on the country's development. Furthermore, no information is available about the treatment and effects of integration processes and international trade agreements on the rights and opportunities of citizens, and particularly on the application and improvement of fundamental rights and principles.
2. The information that should be provided has to do with the contents of the Declaration, the observations and recommendations of ILO bodies, the studies that are conducted in or outside the ILO, the experiences of other countries in promoting the fundamental principles and rights, the Global Follow-up Reports to the Declaration, the IPEC reports, simple guidelines or practical examples that illustrate the contents of the fundamental principles and rights, etc.
3. It is the duty of the State and of trade unions and employers' organizations to provide citizens and their members with complete and timely information.
4. An information network on the fundamental rights and principles should be created for that purpose and could be fed by the three cited actors with ILO support. The objectives are both quantitative and qualitative. Targets should be set involving the number of people who must have heard or read about the fundamental rights and principles, while qualitatively, the aim is to promote fuller analysis of the information and a broader analysis of the subject and to ensure that the matter is discussed in certain forums.
5. A series of mechanisms would be used to provide the information (communications media, the web, etc.) for those purposes, in addition to the formation of the network.
6. It is also necessary to consider the possibility of establishing special statistics to measure the status of the fundamental principles and rights and also to gauge the impact of public policies on the subject and to carry out special studies.
7. An element of special interest is education on fundamental rights and some relevant experiences (a project prepared by the ILO Subregional Office for the Andean Countries, and in Argentina¹) can be found. If students are told about those principles and rights and they are discussed in class and absorbed, the possible effect will be to widen the knowledge about them, awaken interest in them and pave the way for their sustainable discussion

¹The "Building the future through decent work" project aims to incorporate the contents of the Declaration in Argentina's middle school curriculum.

and dissemination over time.

8. It is also important to consider designing methodology to apply the fundamental rights that could be used to identify the weak points and the instruments for dealing with them.
9. It is necessary to create a virtuous circle of complying with the standards. To that end, the State and civil society should jointly create the instruments to accurately gauge the advances or setbacks in standards and that could also be used for taking measures. Those instruments should be regional in conception so that other government bodies in addition to the Executive could be involved in their use.
10. Social dialogue is the primary instrument for disseminating the fundamental principles and rights. It is important to take advantage of the significant experiences in social dialogue that exist in some countries, in order to convert them into vehicles for the dissemination and discussion of the fundamental principles and rights. These vehicles could also offer the chance for workers and employers to agree upon an instrument in which they commit to disseminating and promoting the Declaration and seeking fuller compliance with the fundamental rights and principles.
11. It is also necessary to tie it in with other related issues such as, for example, the country's competitiveness --in other words, how the application of the Declaration contributes towards improving the country's competitiveness.
12. A key aim in the work of prevention (dissemination), control (inspection) and penalization is to build up the Ministry of Labour. This means that the topic of the fundamental principles and rights should cut across all of the Ministry's programmes and offices so that they take these fundamental principles and rights into account when preparing their various activities.
13. It is also necessary to strengthen the institutional capacity of State institutions and of private organizations to prepare public policies relating to the application of the fundamental principles and rights by creating and reinforcing the mechanisms for cooperation and coordination and the transfer of information.
14. Inasmuch as the Declaration is at the root of the labour dimension in the integration processes and is one of the supporting pillars for appropriate integration that avoids inequalities, it is important for those integration processes to reinforce the Declaration.
15. It is also important, within the sphere of the integration agreements, to collect and disseminate good practices in implementing and developing the principles set out in that Declaration. Lastly, the regional integration vehicle should be put to use in building indicators to follow up on and mechanisms to ensure compliance with the Declaration.

CONTINUE ADVANCING

Two years have passed since the last report was prepared on the subject we are dealing with and the fundamental rights at work have become a priority. Their application and the means for ensuring their effectiveness have become a necessity for guaranteeing good global governance and particularly the development of the labour dimension in the American hemisphere within the context of the Summit of the Americas process.

The fundamental principles and rights at work are an expression of the freedom of an individual in performing his production and professional activity and is undoubtedly one of the cornerstones for decent work. Even so, the best means for improving their effectiveness are still to be established. Our task is to identify elements, courses and methodologies. That of the countries is to find the best tripartite way to comply with them, while respecting their own needs and levels of development.

The work is progressing and the idea of applying the fundamental principles and rights is growing clearer. The ILO's constitutional idea of social justice can be attained only through application of those rights.





